JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá, D.C., seis de marzo de dos mil veinticuatro.

Acción de Tutela No. 1100131 030 25 2024 00074 00

Resuelve el Juzgado la acción de tutela formulada por LUZ EMILIA ARÉVALO MARTÍNEZ contra la NUEVA E.P.S.; trámite al cual se vincularon el HOSPITAL MEDERI, ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD –ADRES-, y la SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD.

1. ANTECEDENTES

1.1. La señora Arévalo Martínez presentó acción de tutela reclamando la protección constitucional de sus garantías fundamentales a la salud y vida; y en consecuencia, solicitó que, tuteladas las aludidas garantías, se ordene a la EPS accionada seguir con el tratamiento integral suministrando el servicio de transporte de manera continua mes a mes.

1.2. Como fundamento fáctico principal expuso, en síntesis, que tiene 60 años; en la actualidad se encuentra afiliada a la Nueva EPS en el régimen contributivo de salud y presenta diagnósticos de *“Lupus, Insuficiencia Renal Crónica (ERC- Enfermedad Renal Crónica con diálisis, Hiperparatiroidismo, HTP- Hipertensión Pulmonar severo con uso de oxígeno nocturno”*. Debido a esas patologías, contaba con el servicio de transporte por parte de la EPS, sin embargo, este fue suspendido sin justificación alguna, desmejorando su calidad de vida.

1.3. Admitida la acción constitucional, se dispuso oficiar a las accionadas y vinculadas para que rindieran un informe detallado sobre las manifestaciones contenidas en el escrito de tutela.

1.4. NUEVA EPS manifestó, en resumen, que a la accionante se encuentra afiliada a esa entidad en estado activo, en el régimen contributivo, a quien se le han suministrado todos los servicios de salud requeridos, no directamente, sino por intermedio de red de prestadoras. En ese sentido, aseguró no haber vulnerado los derechos de la actora, por cuanto es responsabilidad de las IPS programar y solicitar la autorización para la realización de citas, cirugías, entrega de medicamentos, entre otros, de acuerdo con sus agendas y disponibilidad, sin que se observe en el expediente cartas de negación de servicios de salud emitidas por parte de esa EPS. Por lo tanto, argumentó la improcedencia de la acción de tutela, indicando que no se observa prueba de actuación u omisión que conlleve a la negación de servicio alguno.

Frente al transporte solicitado, manifestó que no puede garantizar la prestación del mismo para todos los traslados, ya que la cobertura se basa en la habilitación de los servicios para la ciudad de Bogotá, sin que se puedan suministrar otros que no se encuentren contratados. Además, no existe orden médica vigente que prescriba dicho servicio a favor de la accionante. Por lo anterior, solicitó negar el amparo.

1.5. HOSPITAL MEDERI manifestó que la tutelante ha sido atendida por esa institución en varias oportunidades; sin embargo, lo relacionado con la expedición de autorizaciones de servicios médicos es responsabilidad exclusiva de la Nueva EPS, sin que frente a los mismos esa entidad tenga injerencia alguna. Asimismo, que la obligación de brindar el transporte solicitado, corresponde a la EPS, por lo que su suministro es de responsabilidad exclusiva de esa Prestadora. En ese sentido, solicitó su desvinculación.

1.6. ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD –ADRES-. Argumentó falta de legitimación por pasiva, como quiera que es función de la EPS y no de esa entidad la prestación de los servicios de salud requeridos; además, no ejerce funciones de inspección, vigilancia y control para sancionar a las EPS, por lo que la vulneración de los derechos fundamentales demandada se produciría por la omisión atribuible a la accionada y no al ADRES. Por ello, solicitó su desvinculación.

1.7. SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD. Indicó que la accionante se encuentra afiliada a la Nueva EPS, en el régimen contributivo, prestadora que debe suministrarle los servicios de salud por ella requeridos, no solo autorizándolos, sino garantizándolos con observancia de los parámetros de oportunidad, continuidad y calidad; por lo tanto, es la EPS la competente para pronunciarse sobre las pretensiones de la acción, sin que se observe conducta por parte de esa Secretaría que conlleve a la trasgresión de los derechos invocados.

No obstante, que la prestación de los servicios de salud requiere de orden médica que los prescriba, sin que en este caso se observe alguna que determine la renovación del servicio de transporte.

2. CONSIDERACIONES

2.1. 2.1. Sea lo primero señalar, que conforme al artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, la acción de tutela es el mecanismo idóneo para la protección de los derechos constitucionales fundamentales frente a la vulneración o amenaza por la acción u omisión de las autoridades públicas, y en algunos casos de los particulares, siempre que no se disponga de otra vía judicial expedita para ello, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable al tenor de lo preceptuado en los artículos 1º, 5º y 8º del Decreto 2591 de 1991.

2.2. En lo que respecta al derecho a la salud, conviene mencionar que la Constitución Política de Colombia en su artículo 49 estableció que la atención de la salud es un servicio público a cargo del Estado. Del mismo modo la Ley 1751 de 2015 refiere que la salud no solo es un servicio público, sino que además es un derecho fundamental autónomo e irrenunciable. El derecho fundamental comprende el acceso efectivo a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad. Así mismo, de acuerdo con esta disposición es un deber estatal asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas.

La Ley 1751 de 2015 establece que la prestación del servicio de salud se rige bajo el principio de integralidad (cfr. art. 8). Bajo su amparo, los servicios y tecnologías de salud son suministrados de manera completa, con independencia del origen de la enfermedad o condición de salud y sobre todo del cubrimiento o financiación definido por el legislador. Concordante con ello, el art. 10 ibídem estableció como derecho de las personas el no ser sometidos en ningún caso a tratos crueles o inhumanos que afecten su dignidad, ni a ser obligados a soportar sufrimiento evitable, ni obligados a padecer enfermedades que pueden recibir tratamiento.

Asimismo, la Corte Constitucional, ha sostenido que *“...el derecho a la salud es un derecho fundamental y tutelable, que debe ser garantizado a todos los seres humanos igualmente dignos, siendo la acción de tutela el medio judicial más idóneo para defenderlo.”*¹ Adicionalmente, *“el servicio de salud debe prestarse de manera oportuna, eficiente y con calidad, de conformidad con los principios de continuidad, integralidad e igualdad. La prestación del servicio de salud en estos términos se ve limitada cuando se imponen barreras o trabas administrativas por parte de la entidad prestadora de salud, no imputables al paciente. Una de las consecuencias que ello genera es la prolongación del sufrimiento que consiste en la angustia emocional que les produce a las personas tener que esperar demasiado tiempo para ser atendidas y recibir tratamiento. Esta*

¹ Corte Constitucional, Sentencia T -737 de 17 de octubre de 2013. M. P. Dr. Alberto Rojas Ríos.

*clase de conductas generan una grave afectación de los derechos fundamentales no solo a la salud, sino a la integridad personal y a la vida en condiciones dignas*².

2.3. En el presente caso, con la historia clínica y demás documentos aportados al expediente, encuentra acreditado este juez constitucional, que la señora LUZ EMILIA ARÉVALO MARTÍNEZ, de 60 años de edad, presenta diagnósticos “*ERC- Enfermedad Renal Crónica en hemodiálisis*”, “*LES*” (lupus eritematoso sistémico), “*HTA*” (Hipertensión Arterial), “*HTP severa de causa mixta*” (Hipertensión Pulmonar), “*Hiperparatiroidismo*” y “*SAHOS severo con uso de oxígeno nocturno*”. Por esa razón, el 15 de agosto de 2023 le fue ordenado el servicio de “*TRANSPORTE AMBULATORIO DIFERENTE A AMBULANCIA NO PBS-UPC*” que consistió en “*26 TRANSPORTES POR MES, IDA Y VUELTA, TERRESTRE, TOTAL 156 PARA 6 MESES*”; por lo que el servicio tenía un término de duración de 6 meses, finalizando en el mes de febrero de 2024, y debido a su suspensión, es que la accionante acude a la acción constitucional, para que por esta vía, se ordene su suministro.

Al respecto, vale precisar que la Corte Constitucional ha sostenido que la prestación de los servicios de salud como los requeridos por el paciente en el caso de estudio, está en principio sujeta al suministro de los insumos y medicamentos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), hoy Plan de Beneficios en Salud. Sin embargo también ha indicado que la protección a la salud procede en los casos en que dicho servicio es necesario, esto es, cuando el médico tratante lo ordena, bajo el entendido de que el medicamento, insumo o procedimiento es indispensable para conservar la vida digna, la salud o la integridad personal del paciente³.

Entonces, en principio, cuando una prestación se encuentra excluida del plan de coberturas, el paciente debe adquirirla y sufragarla por su cuenta; sin embargo, “*en determinados casos concretos, la aplicación rígida y absoluta de las exclusiones y limitaciones previstas por el POS (hoy PBS), puede vulnerar derechos fundamentales*”⁴.

Para determinar aquellos casos concretos en los que la Entidad Promotora de Salud deberá otorgar la prestación requerida por el paciente, aun cuando se encuentre excluida del Plan de Beneficios, la Corte Constitucional estableció los siguientes requisitos: (i) que la persona encuentra afectado su

² Corte Constitucional, T- 423/17, MP. IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO.

³ Sentencia T-520 de 2012

⁴ Sentencia T-883 de 2003

derecho fundamental a la salud, (ii) no existe un sustituto dentro de las prestaciones en salud incluidas en el Plan de Beneficios en Salud, (iii) no cuenta con los recursos económicos para asumir por su cuenta los servicios médicos que requiere para restablecer su salud, y (iv) existe ya una orden médica que determina la atención reclamada⁵.

En lo que respecta al servicio de transporte reclamado, el Alto Tribunal Constitucional ha indicado que el Plan de Beneficios en Salud se encuentra conformado por dos tipos diferentes de prestaciones: i) los servicios de salud y ii) los mecanismos para su acceso. Los primeros están dirigidos a brindar una atención directa a la salud de la persona, ya sea mediante el proceso de prevención, diagnóstico o tratamiento de la enfermedad, mientras que los segundos no son propiamente servicios de salud como tratamientos, medicamentos o exámenes, sino que corresponden a medios a través de los cuales se puede acceder a estos. Dentro de este último grupo, se encuentra el transporte como un medio para acceder a los servicios de salud que, en consecuencia, está directamente relacionado con los principios de accesibilidad, integridad y continuidad que rigen el sistema de salud⁶.

2.4. Con base en la jurisprudencia citada y en atención a las pruebas obrantes en el expediente, es claro que el servicio de transporte que requiere la paciente se encuentra soportado en las valoraciones médicas practicadas por el galeno tratante, pues de acuerdo con el dictamen consignado en la historia clínica, la accionante es "*Paciente Crónico*", en condición de "*inmunosupresión por ERC; lo que implica susceptibilidad en transporte público, motivo por el cual, ordeno transportes para hemodiálisis...*", y por esa razón, expidió la orden médica de fecha 15 de agosto de 2023 otorgando el servicio de "*TRANSPORTE AMBULATORIO DIFERENTE A AMBULANCIA NO PBS-UPC*" que consistió en "*26 TRANSPORTES POR MES, IDA Y VUELTA, TERRESTRE, TOTAL 156 PARA 6 MESES*".

Así, la actora cumple con los presupuestos constitucionales para que le sea suministrado el transporte requerido, pues es evidente la afectación de salud por las patologías que la aqueja, quien además manifestó no contar con recursos económicos para solventarlo y ya existe una orden médica que determinó su prestación, y aunque si bien es cierto esta última se otorgó por un término de 6 meses, lo cierto es que no se observa que las condiciones de salud de la usuaria

⁵ Sentencia T-592 de 2016

⁶ Sentencia T-459/22

hayan mejorado, pues no se acreditó por parte de la EPS valoración médica en ese sentido, como para pensar que ya no requiere el servicio reclamado.

Todo lo contrario, para esta judicatura la condición de “*Paciente Crónico*” con inmunosupresión por ERC (Enfermedad Renal Crónica), sumado a los otros diagnósticos que padece la actora, la convierten en sujeto de especial protección constitucional, por lo que no se puede dejar desprotegida ante la vigencia de una orden médica, ya que el servicio de transporte requerido, corresponde al medio a través del cual puede acceder a las terapias renales o “hemodiálisis” que necesita para el manejo de su enfermedad, y negarlo implicaría que la accionante se abstenga de asistir a las terapias, poniendo un grave riesgo su vida e integridad, o se vea sometida a subsistir en condiciones indignas. Mírese, además, que de acuerdo con el dictamen consignado en la historia clínica, la accionante es “*Paciente Crónico*”, en condición de “*inmunosupresión por ERC; **lo que implica susceptibilidad en transporte público***”, motivo por el cual, se ordenó en su momento transportes para hemodiálisis (*se resalta*)

Por lo tanto, el servicio de transporte se ordenará en las mismas condiciones y por el mismo lapso dispuesto en prescripción médica del 15 de agosto de 2023, siempre que el especialista en salud, previa valoración médica de la paciente, no adopte otras disposiciones.

La Corte Constitucional ha dicho “...el transporte es un medio para acceder al servicio de salud y, aunque no es una prestación médica como tal, en ocasiones puede constituirse en una limitante para materializar su prestación^[191]. En tal sentido, se trata de un medio de acceso a la atención en salud que, de no garantizarse, puede vulnerar los derechos fundamentales^[192] al desconocer la faceta de accesibilidad al sistema de salud reconocida en el literal c) del artículo 6º de la Ley Estatutaria de Salud” (Sentencia SU 508 2020), y que, aún en el evento de que no contarse con una prescripción médica de un determinado servicio de salud, el juez de tutela puede disponerlo, con base en la evidente necesidad del mismo, como ocurre en este caso donde se acredita el pronóstico que padece la accionante “*inmunosupresión por ERC; **lo que implica susceptibilidad en transporte público***”.

Ahora, en lo que tiene que ver con el tratamiento integral solicitado por la accionante, debe decir este juzgador que no se observa orden del médico tratante que prescriba algún procedimiento o tratamiento médico adicional que necesite, y que este haya sido negado; tampoco se advierte que la prestación del servicio de salud, en lo que respecta a consultas médicas, atención y demás asistencias

requeridas con ocasión a sus patologías, se vea restringido o entorpecido. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado “... *en cuanto a la solicitud de servicio integral de salud, este tribunal considera que no resulta procedente proferir una orden indeterminada respecto de los servicios de salud que no han sido prescritos por un profesional de la salud y que, en consecuencia, no han sido negados por la E.P.S.*”⁷, razón por la cual no es procedente acceder a su petición de ordenar la atención integral, toda vez que se trata de proferir una orden indeterminada y futura, sin comprobar una prescripción expresa del médico tratante adscrito a la EPS.

3. CONCLUSIÓN

De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, se concederá el amparo impetrado, ordenando la NUEVA EPS que, a través de su red de IPS, autorice y suministre a la paciente LUZ EMILIA ARÉVALO MARTÍNEZ el servicio de transporte en las mismas condiciones y por el mismo lapso dispuesto en prescripción médica del 15 de agosto de 2023, siempre que el especialista en salud, previa valoración médica de la paciente, no adopte otras disposiciones. Adicionalmente, se negará el tratamiento integral solicitado.

4. DECISIÓN DE PRIMER GRADO

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de este Distrito Capital de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

4.1. CONCEDER el amparo de las garantías fundamentales a la salud y vida digna de LUZ EMILIA ARÉVALO MARTÍNEZ, conforme lo expuesto en esta providencia. En consecuencia, se dispone:

4.2. ORDENAR a la NUEVA EPS, que a través de su representante legal o quien haga sus veces, en el término de tres (3) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, a través de su red de IPS, autorice a la paciente LUZ EMILIA ARÉVALO MARTÍNEZ el servicio de transporte, el cual deberá ser suministrado en las mismas condiciones y por el mismo lapso dispuesto en prescripción médica del 15 de agosto de 2023, siempre que el especialista en salud, previa valoración médica a la paciente, no adopte otras disposiciones.

⁷ Sentencia T-769/13

4.3. Negar la concesión del tratamiento integral, conforme lo indicado en la parte considerativa de esta decisión.

4.4. Notificar este fallo conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4.5. Remitir las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no es impugnada.

Notifíquese y Cúmplase.
El Juez,

LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO

DLR

Firmado Por:
Luis Augusto Dueñas Barreto
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 025
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **97e9e9f1dd47fa2f02d9beb6529ba2bab54dab588e2f5544124d5bb2c0721039**

Documento generado en 06/03/2024 04:53:35 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>